

CÓMO UNA DEMOCRACIA DE LIBRO DE TEXTO DESEMBOCÓ EN UN RÉGIMEN DE PARTIDO ÚNICO... ES EL PERONISMO, ESTÚPIDO

Marcelo Cavarozzi

Han transcurrido ya más de veinte años en la Argentina desde la festejada transición democrática de 1983. Esa transición puso fin a la dictadura militar más trágica de la historia argentina. El derrumbe del autoritarismo, además, abrió el espacio para la inauguración de un gobierno civil coronado por una inusual aureola de legitimidad. El candidato triunfante, Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, no sólo simbolizó más convincentemente que su rival peronista el rechazo de la ciudadanía hacia la dictadura, sus desaciertos y sus crímenes. El político radical, además, pareció encarnar una preferencia que resultaba ciertamente novedosa para los argentinos: la aspiración a que funcionarios y dirigentes políticos subordinasen tanto su gestión, como sus prédicas, a las normas constitucionales y legales en el marco de la consagración, ampliamente mayoritaria, de la democracia representativa como el orden político legítimo.

Hace pocos meses se cumplió el vigésimo aniversario del traspaso del mando presidencial a Alfonsín por parte del último oficial militar que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, el general Reynaldo Bignone. La circunstancia que esa fecha, el 10 de diciembre, pasara sin pena ni gloria indica cuán lejos que estuvieron de cumplirse las expectativas que había despertado la instalación de la democracia. No se trata, meramente, que el primer gobierno constitucional culminara en un completo fracaso; la "falta de memoria" sugiere una circunstancia más dramática: la devaluación experimentada por la democracia política en la Argentina en estos veinte años.

Es cierto que la democracia argentina ha sobrevivido por más de dos décadas, lo que de hecho constituye el período más prolongado de continuidad institucional asociada a la vigencia del sufragio universal y las elecciones libres¹. Sin embargo, esta circunstancia —que no deja de re-

¹ La primera experiencia, y la más prolongada hasta 1983, de democracia política en la Argentina se extendió desde 1916 hasta 1930. La aprobación de la denominada Ley Sáenz Peña permitió que entrara efectivamente en vigencia el sufragio universal masculino; de todas maneras, esos fueron años en que no sólo las mujeres fueron excluidas de las elecciones nacionales, sino también los extranjeros. No era este último un

presentar un avance para un país recurrentemente afectado por las rupturas institucionales y las intervenciones de las fuerzas armadas— resulta seriamente empañada por la intensificación de una diferente modalidad de inestabilidad que se ha vuelto endémica en la América Latina contemporánea, y que ha afectado a la Argentina en dos ocasiones recientes: el derrumbe de gobiernos en el marco de explosiones de protesta social, que a menudo están asociadas a graves crisis económicas. Primero fue Alfonsín, quien, en 1989, tuvo que abandonar el cargo seis meses antes de completar su mandato al enfrentarse con un estallido hiperinflacionario que había dejado al Estado absolutamente inerte y había disuelto todo vestigio de autoridad pública. La renuncia de Alfonsín, quien fue acompañado en ese acto por su vicepresidente, permitió que se hiciera cargo de la presidencia el político que había triunfado en las elecciones de mayo de aquel año, el peronista Carlos Menem. Doce años más tarde, otro radical, Fernando de la Rúa, también se vio forzado a renunciar cuando no había completado siquiera la mitad de su período presidencial, en medio de una crisis social, económica y política mucho más grave que la de 1989.

Lo que me propongo explorar en este artículo, precisamente, es una de las dimensiones problemáticas de la coyuntura abierta a fines del 2001 con el derrumbe definitivo del gobierno de la Alianza: la crisis de los partidos políticos². La llegada al gobierno en 1999 de la fórmula De la Rúa-Álvarez no sólo tuvo la paradójica consecuencia de hacer estallar a la alianza en menos de un año, sino que, además, se tradujo poco después en la virtual desaparición de los dos partidos que la integraron como fuerzas nacionales. Este fenómeno resulta particularmente dramático en el caso de la Unión Cívica Radical, un partido que se había fundado en las postrimerías del siglo 19; el hecho que este partido haya quedado reducido a comienzos del siglo 21 a una estructura desarticulada con presencia significativa en menos de la mitad de los distritos electorales, constituye un dato fundamental. De hecho, la virtual desaparición de la UCR de la escena política nacional sugiere un proceso de implosión del incipiente sistema partidario que comenzó a perfilarse durante el ocaso del régimen militar de 1966-1973. Como examino en textos previos, el sistema de partidos en la Argentina nunca había funciona-

dato insignificante en la Argentina de comienzos del siglo 20: según el censo de 1914, el 29,9% de la población era de origen extranjero, proporción que se incrementaba casi al 50% en el caso de aquellos en edad de votar (Nicolás Sánchez Albornoz, *La población de América Latina*; Alianza, Madrid, 1973, p. 188).

² La Alianza fue la coalición integrada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO. Este último, a su vez, era una conjunción de grupos de izquierda y de disidentes del peronismo que se habían apartado de este partido contrariados por el rumbo que había tomado el gobierno de Carlos Menem. La Alianza se conformó con anterioridad a las elecciones parlamentarias de 1997 y se impuso tanto en esos comicios como en los presidenciales de 1999.

do de manera estable en el largo siglo comprendido entre 1862 y 1970³. Paradójicamente, la trama de un sistema partidario comenzó a armarse a mediados de la década de 1970 cuando en un clima político que se estaba tornando cada vez más violento, los dirigentes de las dos grandes fuerzas políticas argentinas, el peronismo y el radicalismo, se reconciliaron con la firma de un documento que fue bautizado como "La Hora del Pueblo". De ese modo, Perón y Balbín, este último principal líder de la UCR desde 1950 hasta su muerte en 1981, dejaron atrás un cuarto de siglo de antagonismo e intolerancia recíproca, período durante el cual habían conspirado permanentemente el uno contra el otro, denegando toda legitimidad a los gobiernos y fuerzas políticas con las cuales habían estado asociados.

Sin embargo, durante la década de 1970 la reconciliación postulada por los dos viejos enemigos no encontró eco alguno en varios actores clave de la política argentina. Por el contrario, especialmente las fuerzas armadas y los grupos guerrilleros —los Montoneros de extracción peronista y el Ejército Revolucionario del Pueblo, un grupo más pequeño de origen trotskista— como así también las franjas superiores del empresariado y la dirigencia sindical peronista, se embarcaron en una escalada de violencia retórica y armada que fue coronada por el golpe militar de marzo de 1976. La asonada, prácticamente, no fue resistida por nadie⁴. Como es bien sabido, el régimen militar argentino encarnó una modalidad bastante peculiar de régimen de excepción: tanto hacia fuera como en el interior de los propios aparatos estatales, la dictadura no solo vulneró las disposiciones constitucionales y legales del Estado de derecho, sino que permanentemente trasgredió la misma legislación de excepción que había dictado. El ejemplo más aberrante de estas prácticas fue la liquidación de los opositores más radicales, y de numerosos meros sospechosos de serlo, a través de la "desaparición" de personas.

Las políticas implementadas por el gobierno militar agudizaron la crisis fiscal en la que se encontraba sumido el Estado y la tornaron irreversible⁵. En parte resultó paradójico que la destrucción del Estado no se operó porque los militares tuvieran éxito en sus objetivos, sino, por el

³ Ver "De la inflación como política a la construcción de un sistema de partidos", en *Plural*, N° 10/11 (1988)

⁴ La violencia política de ese período fue alimentada principalmente por las conductas autoritarias y el estilo de represión clandestina de las fuerzas armadas y de los grupos parapoliciales que ellas ampararon. Pero también contribuyeron significativamente a la generación de ese clima de violencia las prácticas de los grupos guerrilleros peronistas y de izquierda no peronista que creyeron llegado el momento para alcanzar el poder a través de la "violencia popular revolucionaria".

⁵ Ricardo Carciofi sintetizó magistralmente los principales rasgos de este proceso al que definió como "la desarticulación del pacto fiscal". (CEPAL, Buenos Aires, 1990. Documento N° 36).

contrario, porque fracasaron. Al momento de la transición a la democracia a fines de 1983, el sector público había quedado atrapado entre dos pinzas: una, el agotamiento del viejo modelo dirigista y autárquico y, la otra, el fracaso en reformarlo. La crisis de la deuda desatada en 1982, que había sido generada por las mismas políticas implementadas durante el gobierno del general Videla (1976-1981), no hizo más que intensificar la impotencia estatal.

El fracaso de la reforma del Estado intentada por los militares en la segunda mitad de la década del 70 constituyó un lastre gravísimo para sus sucesores democráticos en 1983. Pero la intensidad del proceso de destrucción estatal aumentó a partir de la transición a la democracia, porque, para expresarlo de manera esquemática, Alfonsín y los políticos de la UCR –tanto los anteriormente opuestos al nuevo presidente que se habían agrupado en la denominada Línea Nacional, como los más allegados a él del Movimiento de Renovación y Cambio– no se percataron ni del derrumbe del Estado argentino ni tampoco de los cambios que se estaban operando en el capitalismo mundial. Esta miopía del gobierno de la Unión Cívica Radical quedó reflejada de manera transparente en uno de los más célebres eslóganes que acuñó Raúl Alfonsín; el candidato radical repetía durante su campaña: "...con democracia se come, con democracia se educa, con democracia se vive". Edgardo Catterberg rescataba agudamente la esencia de la visión de los radicales victoriosos en 1983: "Alfonsín no solamente vinculó la democracia con la necesidad de recrear un orden político en la Argentina, sino que también la relacionó con la posibilidad de progreso colectivo e individual; aún más, instaló la idea de que la democracia es un pre-requisito para el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida"⁶.

Al igual que el peronismo, los triunfadores de 1983 negaron la crisis por la que estaba atravesando el Estado. Como resultado de ello, unos y otros se convirtieron en los cautivos político-culturales de la matriz estado-céntrica, y con ello, no hicieron más que acelerar y agravar los efectos de su derrumbe. Después del fracaso definitivo del Plan Austral, el ajuste caótico de 1987-1989 fue la culminación de este proceso. Las herramientas públicas para el manejo de la economía en contextos inflacionarios, ya devaluadas por la crisis que se arrastraba desde 1975-76 y el cepo creado por la deuda externa, se convirtieron en un instrumento absolutamente inservible.

En el contexto de ajuste caótico se operó un par de transformaciones fundamentales en el peronismo. En primer lugar, el liderazgo continuista

⁶ Los argentinos frente a la política. Cultura política y opinión pública en la transición argentina a la democracia. Buenos Aires: Planeta, 1989.

y autoritario que había controlado el partido durante la transición a la democracia fue reemplazado por la así bautizada "Renovación". Este proceso lo convirtió en un partido absolutamente funcional para el funcionamiento de un sistema de partidos pluralista, al aceptar plenamente la legitimidad de la competencia electoral como fundamento de su identidad política.

En segundo lugar, el partido se transformó al compás de un fenómeno dual que no dejó de tener bastante de contradictorio. Por un lado, a partir de la década de 1980, la Argentina se *refederalizó*. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien la Constitución aprobada en 1853 había establecido un régimen republicano, representativo y federal, en la práctica el país había sido un sistema unitario al menos desde 1880. Ese año, el presidente Roca federalizó a la ciudad de Buenos Aires, lo que implicó la liquidación de las tendencias porteñas que favorecían el autonomismo. Con la llegada de la democracia en 1983 comenzó un proceso de transferencia de recursos fiscales y servicios públicos –fundamentalmente de salud y educación– del Estado nacional a los estados provinciales. Esta transferencia, que se aceleró pronunciadamente en la década de 1990, fue acompañada por el surgimiento y consolidación de elites políticas provinciales dentro de los dos grandes partidos, el peronismo y el radicalismo. Este segundo proceso revirtió las tendencias centralizantes que habían predominado desde la década de 1940, especialmente en el caso del peronismo.

Por otro lado, el área metropolitana de Buenos Aires –es decir el conjunto integrado por la capital federal (cuya población se ha estabilizado en alrededor de tres millones) y los departamentos del Gran Buenos Aires (que a esta altura agrupan a alrededor de siete millones de habitantes)– ha experimentado un *sistemático aumento de su peso político y social*⁷. Debe repararse que este fenómeno dual –refederalización y mayor peso del Gran Buenos Aires– opera en contra del sentido común que supone que la relación de fuerzas entre las provincias y Buenos Aires es un juego de suma cero.

En 1989 la triunfante fórmula presidencial del peronismo, integrada por el gobernador de La Rioja, una las provincias más pequeñas y pobres del país, y el ex-intendente de Lomas de Zamora, uno de los partidos más populosos del Gran Buenos Aires, condensaba ejemplarmente esta dualidad. Sin embargo, los dos ingredientes de la fórmula, Carlos Menem y Eduardo Duhalde, tenían en ese momento un peso específico muy diferente. Carlos Menem era un político vastamente conocido; ya

⁷ Cabe anotar que en la provincia de Buenos Aires se ha denominado "partidos" a los departamentos. No ocurre así en el resto de las provincias argentinas.

había sido gobernador en 1973 y había conquistado arrolladoras victorias en las dos contiendas por la gobernación provincial en 1983 y 1987. Más aún, ayudado por su pintoresca estampa, que cultivaba deliberadamente un cierto aire que lo asemejaba a un caudillo histórico de su provincia, Facundo Quiroga, y un estilo campechano y transgresor con el que circulaba permanentemente por las pantallas televisivas, Menem había estado en campaña tras la candidatura del peronismo desde 1983, y ésta fue una de las circunstancias que lo ayudó a derrotar en la elección primaria de julio de 1988 a su adversario por la candidatura presidencial de su partido, Antonio Cafiero⁸. No fue una empresa sencilla; Cafiero era el gobernador de la provincia de Buenos Aires —cargo al cual había accedido el año anterior derrotando clamorosamente al candidato radical, Juan Manuel Casella, al cual Alfonsín había seleccionado como su delfín— y además controlaba gran parte de la maquinaria partidaria.

Eduardo Duhalde, en cambio, era un político poco conocido en su propia provincia y prácticamente desconocido en el resto del país⁹. Despechado por Cafiero en 1987 en la nominación como cabeza de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, se alió a Menem y fue uno de los factores que le permitieron al riojano batir a Cafiero en su propia provincia. El estilo de Duhalde no podía ser más opuesto al de Menem: el bajo perfil y la sobriedad no eran ajenos a su vinculación con la cúpula del catolicismo de su provincia, caracterizada por su conservadurismo cultural y político.

A partir de la inauguración del gobierno peronista en julio de 1989, se empezaron a perfilar los términos del conflicto entre el presidente y el vice. Ciertamente el conflicto estuvo de entrada vinculado a la ostensible intención de Menem de reformar la Constitución nacional para permitir su reelección al término de su primer mandato y a la paralela pretensión de Duhalde de suceder a su compañero. Esta pretensión se reforzó cuando Duhalde renunció a la vicepresidencia para presentar su candidatura a la gobernación de Buenos Aires y a su abrumadora victoria en las elecciones de 1991.

Pero las alternativas del conflicto entre Menem y Duhalde no sólo respondieron a la colisión de sus respectivas aspiraciones políticas. Tam-

⁸ Landi, sin duda el más agudo analista del menemismo, señaló que "...la figura de Menem, imitada en los medios por artistas que también retrataban a otras personalidades, combinada con la construcción efectiva de una agenda de reformas anti-estatistas por parte de comunicadores sociales, constituyó el engranaje central de las voces de la verdad cultural del menemismo". Oscar Landi & Marcelo Cavarozzi, "Menem ¿El fin del peronismo? (Crisis y Posttransición en la Argentina)" *Documento CEDES* N° 66; Buenos Aires, 1991.

⁹ Una encuesta de 1987 de Catterberg y Asociados revelaba que sólo el 40 % de los habitantes del Gran Buenos Aires reconocían el nombre del entonces intendente de Lomas de Zamora.

bién tuvieron que ver con lógicas de construcción de capital político de carácter contrastante. Menem se enfrentó a un Estado quebrado y a una sociedad en la que se había licuado casi totalmente la autoridad pública.

La manera catastrófica como se desplomó el gobierno de Alfonsín, incluyendo la salida anticipada del presidente y la disolución del sustrato último de la soberanía estatal, esto es la moneda, generó un amplio espacio para la implementación de reformas radicales apuntando a la construcción de una nueva matriz socio-política que combinara “menos” Estado y “más” mercado. Esta brecha le permitió a Menem articular un discurso que iba en contra del sentido común tradicional del peronismo, que se apoyaba en el dirigismo estatal y la ampliación de las prestaciones sociales. El derrumbe del gobierno radical en 1989 creó las condiciones que le permitieron al candidato triunfante plantear que el achicamiento del Estado no sólo era inevitable, sino también aconsejable y, en cierto sentido, congruente con los valores últimos del peronismo¹⁰. Además, esta operación le posibilitó a Menem diferenciarse de los repudiados militares y de las reformas intentadas entre 1976 y 1981; las políticas de corte neo-liberal no formaban ya parte de un proyecto autoritario impuesto “a sangre y fuego”, sino que eran el resultado democrático del clamor ciudadano.

La tarea de Menem se vio facilitada por la doble impotencia que había revelado el gobierno de Alfonsín en su último tramo: por una parte, la incapacidad para evitar el resurgimiento de la inflación, que estalló violentamente al compás de la desintegración del Plan Austral en 1988-89, y, por la otra, la incapacidad para controlar las novedosas expresiones de rebeldía del tradicional protagonista de las turbulencias más violentas de la política argentina, es decir, las fuerzas armadas. Esta doble impotencia fue el nudo gordiano del alfonsinismo. El primer gobierno de Menem, hay que subrayarlo, pudo desatarlo, y el éxito de buena parte de su ciclo político se apoyó en esos éxitos iniciales. La adopción de la política monetaria de la convertibilidad peso-dólar en 1991 puso fin a la inflación; la represión de la última asonada militar, en 1990, terminó con las rebeliones abiertas de los sectores golpistas de las fuerzas armadas. Estas demostraciones iniciales de efectividad política, junto a la rapidez y eficacia decisoria que el nuevo gobierno demostró en abrazar el credo de las políticas neo-liberales —rasgos que, ciertamente, aparecieron como la antítesis de los de sus predecesores— permitieron a Menem reconstruir significativamente la autoridad pública. Esta reconstruida autoridad fue percibida, y hasta cierto punto agradecida, por la sociedad argentina, y también por su propio partido. El proceso de renovación de la autoridad pública se apoyó en la despolitización progresiva de la sociedad. El

¹⁰ Este punto está desarrollado en el texto citado de Oscar Landi y Marcelo Cavarozzi.

“siganme”, eslogan central de la campaña menemista, se transformó en el “déjenme hacer y no se entrometan” como estilo de gobierno. El gobierno no daba cuentas y la sociedad no las pedía. Mientras algunos sectores pudieran acceder a los beneficios de la nueva situación —la desaparición de la inflación, en todos los casos; las nuevas perspectivas de consumo y crédito para un sector considerable de la renovada clase media y el acceso a pingües ganancias para los grupos que se beneficiaron con las políticas de privatización— dichos sectores firmaron gustosos el pacto implícito de no hacer preguntas.

Las operaciones mediáticas, un ingrediente central en la estrategia político-comunicativa de Menem, se combinaron efectivamente con diversas reformas de las regulaciones electorales y otras iniciativas que apuntaron a debilitar el poder de las estructuras partidarias. Entre ellas, las más importantes fueron la “ley de lemas”, las primarias abiertas y la selección de figuras extra-partidarias cuya popularidad estaba vinculada al deporte o el espectáculo. Entre estos últimos, los ejemplos más relevantes fueron Carlos Reutemann, un ex corredor de Fórmula 1, que fue electo como gobernador de la provincia de Santa Fe, y “Palito” Ortega, un cantante que ocupó igual cargo en Tucumán. El caso del primero resulta especialmente interesante, porque a partir de principios de la década de 1990 se transformó en el dirigente indiscutible de una de las provincias más importantes, Santa Fe, cultivando una imagen de honestidad y desinterés por la política tradicional. En 2002, Reutemann se convertiría en el candidato que casi unánimemente preferían los dirigentes peronistas para la elección presidencial de 2003 para enfrentarse a Menem¹¹. La firme negativa que le opuso Reutemann a la materialización de su candidatura fue la única razón que la frustró.

El itinerario seguido por Duhalde a partir de 1991 para construir capital político fue enteramente diferente al de Menem. El presidente estructuró una nueva modalidad de relación Líder/Partido/Medios/Sistema Político que, en buena medida, descansó en la generación de un tipo diferente de personal político. En cambio, Duhalde recurrió a una estrategia menos innovativa, pero igualmente efectiva. Apoyándose en la maquinaria de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de las municipalidades del Gran Buenos Aires administradas por políticos adictos, desplegó un conjunto de mecanismos de control político y social. Estos mecanismos descansaron, por una parte, en la distribución de cargos a militantes y partidarios y, por la otra, en la adjudicación discrecional de beneficios dentro de programas asistenciales dirigidos a los estratos más pobres de la población. Especialmente los beneficios sociales fueron

¹¹ Este apoyo de la dirigencia peronista no era ajeno, por supuesto, a lo que manifestaban las encuestas de opinión a mediados de ese año. Reutemann era, por lejos, el candidato preferido por la mayoría de los argentinos.

asignados a través de dos redes: una controlada por los respectivos jefes territoriales —en su mayoría los intendentes municipales— y otra organizada en torno a alrededor de diez mil voluntarias vecinales —las llamadas “manzaneras”— bajo la conducción de “Chiche” Duhalde, la esposa del gobernador, quien formalmente estuvo a cargo del Consejo de la Mujer y la Familia provincial. Muchas de las “manzaneras” estaban también vinculadas a las redes de asistencia social de la Iglesia católica.

El financiamiento de los programas sociales, como así también de las obras públicas que beneficiaron desembozadamente a los intendentes adictos, se expandió significativamente gracias a la sanción de una ley nacional, la del Fondo de Reparación Histórica, por la cual se adjudicó a los departamentos del conurbano bonaerense una suma que osciló entre los 430 y los 650 millones de dólares anuales a partir de 1992. No resultó casual que esos fondos, que se sumaban a los montos presupuestarios normales, se asignasen preferentemente a las catorce intendencias que el duhaldismo controlaba en el Gran Buenos Aires del total de diecinueve. En resumen, Duhalde, a partir de 1991, fue construyendo el “duhaldismo”; su estructura, si bien tradicional para los partidos de masas contemporáneos, resultó novedosa para el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Ella consistió, básicamente, en el armado de redes de implantación territorial de caudillos del Gran Buenos Aires que se prolongaban hacia abajo en “punteros” locales y funcionarios municipales.

En 1994, Duhalde perdió la primera batalla frente a su ex compañero de fórmula. Menem logró convencer al todavía jefe del radicalismo, Raúl Alfonsín, para que no se opusiera a la declaración de necesidad de la reforma constitucional, declaración que requería mayorías especiales en ambas cámaras del parlamento. La subsiguiente reforma de aquel año permitió la reelección presidencial inmediata, si bien reduciendo el mandato a un período de cuatro años. Pero, además, la reforma constitucional modificó el método de elección presidencial, eliminando el procedimiento indirecto al abolir el colegio electoral y sancionar la elección popular directa de la fórmula presidencial¹². El efecto más importante de esta reforma fue la de incrementar el peso político de los distritos con mayores poblaciones, y especialmente de la provincia de Buenos Aires, cuyos ciudadanos sumaban casi el cuarenta por ciento del padrón nacional.

Menem, por lo tanto, fue reelecto presidente en 1995 y Duhalde tuvo que conformarse con ocupar nuevamente la gobernación de Buenos Aires,

¹² No es un tema que interese desarrollar en este trabajo, pero debe anotarse que la reforma introdujo también el *ballotage*. La reforma constitucional introdujo un curioso sistema para decidir en que casos se celebraría una segunda vuelta, que evitó el tradicional requisito de exigir una votación del cincuenta por ciento para consagrar un candidato en la primera vuelta. La ingeniería de la reforma, en este caso, apuntó a garantizar que Menem triunfara en la primera vuelta en 1995, a pesar que no llegara al umbral aludido. Y así fue.

cargo para el que también fue reelecto ese mismo año. Paradójicamente, sin embargo, la reelección de Menem marcó el comienzo de un largo y tortuoso proceso de declive del político que marcó indeleblemente el fin de siglo argentino. Este derrotero, que culminaría en la humillante derrota virtual que sufrió en las elecciones de 2003, tuvo bastante que ver con una vieja práctica de la política argentina. A pesar de las novedades que introdujo el riojano, su accionar durante la primera mitad de la década no había hecho más que reeditar un recurso repetidamente utilizado para enfrentarse a los problemas en la fórmula estado-céntrica argentina: las fugas hacia delante¹³. En el caso concreto de la Ley de Convertibilidad, esto implicó una evitación de los dilemas que generaba la apreciación del peso. Si bien durante la década de 1990 los mecanismos institucionales no fueron formalmente interrumpidos, lo cierto es que progresivamente se fue renunciando a ellos procesar debates y conflictos. Este perverso mecanismo influyó decisivamente para dificultar el diseño e implementación de respuestas a los problemas que, de modo ominoso, se acumulaban en el horizonte económico y social. Me refiero, en particular, a qué hacer con la convertibilidad y sus efectos negativos sobre la competitividad de las exportaciones argentinas; al continuado crecimiento de la deuda externa; al aumento del desempleo y a la intensificación de las asimetrías en la distribución del ingreso y la riqueza.

De todas maneras, hacia 1997-1998, y gracias al nuevo, y postrer, ciclo de ingreso de capitales extranjeros, las políticas neo-liberales parecían haber sorteado las dificultades que había experimentado la economía argentina en 1995 como resultado de la crisis del Tequila. En este clima eufórico, Menem subió las apuestas nuevamente y sugirió que se postularía nuevamente a la presidencia en 1999. La posibilidad de la "re-reelección" contrariaba expresamente al texto constitucional recientemente reformado; esta circunstancia, además de generar violentas reacciones de parte de la Alianza conformada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, hizo totalmente abierto el conflicto entre Menem y Duhalde. Esta vez, finalmente, Menem no pudo llevar adelante sus propósitos y Duhalde se convirtió en el candidato del peronismo para las elecciones presidenciales.

Sin embargo, Duhalde no había llegado al final del camino. Tres circunstancias fundamentales conspiraron para que no pudiera ganar las elecciones. En primer lugar, el hecho que se fue tornando cada vez más evidente la precariedad de la situación de la macro-economía argentina; en segundo lugar, que la creación de la Alianza en 1997 ya había probado que el peronismo podía ser derrotado, y *last but not*

¹³ Esta modalidad de funcionamiento político de la matriz estado-céntrica la discuto en "Beyond Transitions to Democracy in Latin America", *Journal of Latin American Studies*, 24, pp. 665-684

Jeast, los claros indicios que Menem sabotó la campaña de su compañero de partido. Sin embargo, del descalabro electoral de 1999, cuando Duhalde fue claramente derrotado por la Alianza, salvó al menos a su último bastión, la provincia de Buenos Aires. A pesar que los pronósticos electorales presagiaban el triunfo aliancista en la contienda por la gobernación provincial, el candidato peronista –otro ex-vicepresidente que renunciaba para transformarse en postulante a la provincia, Carlos Ruckauf– se impuso.

El triunfo de la Alianza en las elecciones presidenciales de 1999 fue seguida por una gestión de gobierno de una incompetencia extrema, resultado al que contribuyeron igualmente las ineptitudes del presidente De la Rúa y su entorno, por un lado, y de los dos partidos que integraron la coalición gubernamental, por el otro. A menos de un año de producido el cambio de gobierno la renuncia del vicepresidente Álvarez desencadenó un proceso de vertiginosa implosión que se cerraría en octubre de 2001 con la derrota de los candidatos de la Alianza en las elecciones parlamentarias. En dichas elecciones predominó un síndrome de política descentrada, o dislocada, caracterizado por el hecho que en un buen número de distritos las alternativas que se le presentaron a la ciudadanía no reflejaban opciones que tuvieran una relación verosímil ni con la trayectoria previa de los candidatos, ni con posturas de gobierno mínimamente discernibles. Finalmente, el gobierno de De la Rúa resultó pulverizado: la corrida bancaria y del dólar que se produjo en las semanas siguientes a la elección alimentó un conjunto de protestas sociales del más variado cuño y el presidente se vio forzado a renunciar el 21 de diciembre de 2001. En ese proceso de aceleración caótica tuvo un peso significativo la postura del duhaldismo que fue incrementando el nivel de sus exigencias al gobierno nacional a través de demandas del gobernador de Buenos Aires y de los intendentes adictos. Estas demandas resultaban imposibles de satisfacer desde la perspectiva de un gobierno totalmente desbordado por los acontecimientos económicos y políticos. En los días del derrumbe final resultó evidente que varios jefes territoriales peronistas del Gran Buenos Aires fomentaron la presencia de activistas y sectores marginales en las movilizaciones que contribuyeron a aumentar la sensación de caos y desgobierno. De todos modos, uno de los datos más significativos de la crisis política de finales del 2001 fue que buena parte de la ciudadanía no sólo manifestó su repudio al gobierno de De la Rúa, sino también al conjunto de la clase política. Esa actitud, que ya se había manifestado en la elección parlamentaria de octubre a través del denominado “voto bronca”, se reforzó en diciembre en torno a la consigna “Que se vayan todos”, que en cierto sentido se constituyó como el *Leitmotiv* de las movilizaciones callejeras.

La caída del gobierno de la Alianza abrió un período que comprendió los tres o cuatro primeros meses de 2002, en los cuales pareció que la

Argentina no podría evitar un derrumbe societal catastrófico que incluyera un rebrote de la hiperinflación y una colapso total de los servicios públicos. Este período incluyó la renuncia del primer presidente que la Asamblea Legislativa nombró en reemplazo de De la Rúa, la llegada de Duhalde a la presidencia y el fracaso de las primeras medidas que se tomaron para normalizar la economía afectada por el *default*, la devaluación del dólar y la explosión del sistema financiero. Sin embargo, hacia mediados de año, con el nombramiento de un nuevo ministro de economía, Roberto Lavagna, y el paulatino debilitamiento de las protestas sociales, Duhalde comenzó a tener éxito en el proceso de re-equilibramiento del gobierno. Uno de los ingredientes que contribuyó a este resultado fue, sin duda, el hecho que Duhalde manifestara, al hacerse cargo de la presidencia, su intención de no postularse para las próximas elecciones presidenciales¹⁴. A esta circunstancia se le agregó que, partiendo de una situación de “estabilización en el fondo”, Lavagna consiguió generar, o tornar creíbles, los incentivos para que se produjera un sostenido proceso de sustitución de importaciones que hacia comienzos de 2003 ya había permitido empezar a disminuir las altísimas tasas de desempleo que había generado la caída de casi un 15% del producto bruto durante 2001-2002. Además, la Argentina se benefició con el alza del precio en el mercado internacional de algunos *commodities*, especialmente de la soja. Estas tendencias generaron una relativa bonanza fiscal, por supuesto apoyada en el *default* parcial, que permitió que el gobierno financiara una expansión significativa de los planes sociales para los desocupados.

El re-equilibramiento político implicó que se aliviara el “sitio a los políticos” que había predominado durante prácticamente un año. En ese contexto, Duhalde tenía que resolver una cuestión central y reiterada: ¿qué hacer con Menem que, obviamente, se presentaría como candidato a las elecciones? Este problema incluía, a su vez, dos temas: el primero, impedir que celebraran primarias dentro del peronismo para seleccionar al candidato, pues ello implicaba inevitablemente consagrarlo a Menem; el segundo, generar un candidato peronista alternativo que pudiera competir contra Menem y eventuales candidatos de otros partidos. A pesar de las dificultades con que se enfrentó, Duhalde maniobró hábilmente y resolvió favorablemente ambos temas. Por un lado, en otra disposición, cuyo estatus constitucional y legal era dudoso, se dispuso que cualquier partido –aunque claramente “cualquier” partido era el peronismo– podría presentar más de un candidato a la primera vuelta de las elecciones

¹⁴ Inicialmente, la Asamblea Legislativa dispuso que Duhalde completara el período correspondiente a De la Rúa, que se extendía hasta diciembre de 2003. A los pocos meses, y como reacción a una acción policial en uno de los distritos del Gran Buenos Aires, Avellaneda, que incluyó el asesinato de dos manifestantes, Duhalde anunció que acortaría su mandato para concluirlo en mayo de 2003.

presidenciales, cuya fecha se fijó para abril de 2003. Por otro, trató de construir al candidato peronista alternativo frente a la negativa del gobernador santafesino, Carlos Reutemann, de presentar su candidatura. El primer intento, que trató de promover al gobernador Juan Manuel de la Sota, fue un rotundo fracaso; el cordobés nunca remontó en las encuestas. El segundo fue el gobernador de una remota provincia patagónica, Néstor Kirchner, de Santa Cruz.

Durante los primeros meses de 2003, Kirchner tuvo la capacidad de apuntalar su candidatura y se convirtió en uno de los competidores más fuertes en una elección presidencial de características inusitadas. Los tres candidatos peronistas eran gobernadores, o ex-gobernadores, de provincias extremadamente pequeñas; además de Menem (La Rioja) y Kirchner (Santa Cruz), se presentó otro reiterado candidato presidencial, quien también se había frustrado en 1995 con la reforma constitucional, Adolfo Rodríguez Saa, de San Luis¹⁵. Los otros dos candidatos creíbles eran Lilita Carrió, ex política radical, quien se convirtió en dirigente de una nueva agrupación de izquierda, el ARI, y Ricardo López Murphy, otro ex dirigente radical que coaligó a un conjunto de pequeños grupos de derecha y centro-derecha.

El manejo de una porción importante del electorado del Gran Buenos Aires por parte de la maquinaria del duhaldismo, le permitió a Kirchner obtener una votación en torno al 22% del electorado, que lo envió al *ballotage* junto a Menem, que obtuvo, por su parte, un 25% de votos. Cuando Menem renunció a competir en la segunda vuelta, dado que las encuestas predecían que no sólo iba a perder, sino que corría el riesgo de obtener menos votos que en la primera vuelta, Kirchner accedió a la presidencia.

En la nueva coyuntura perfilada a partir de mayo de 2003, la política argentina, y en el centro excluyente de ella el peronismo, se confrontan con algunos dilemas que ya despuntaban quince años atrás. Si bien el conflicto Menem-Duhalde sea probablemente un tema ya superado, Menem, más allá de sus incursiones en el mundo de las *beauty queens*, es un tema judicial y no político en la Argentina. La relación entre el actual presidente Kirchner y su gran elector, es decir, Duhalde, reitera el dilema planteado en el peronismo en 1989. ¿Cómo integrar dentro de un partido gobernante, que se ha convertido en la única fuerza política de enverga-

¹⁵ Dicho sea de paso, Rodríguez Saa había sido la primera selección de la Asamblea Legislativa de Diciembre de 2001 para ocupar la presidencia después de la renuncia de De la Rúa. Pero el puntano, renunció en una pintoresca ceremonia a los siete días de asumido el cargo. La principal razón de esta renuncia fue el vacío que le crearon los otros jefes del peronismo cuando se percataron que Rodríguez Saa quería perpetuarse en el cargo.

dura nacional, lógicas contrastantes de acumulación de capital político? Por cierto que de las respuestas a este dilema, se desprenden corolarios vinculados a otros desafíos centrales de la Argentina de principios del siglo 21. Entre ellos, los más importantes están vinculados a 1) el aprovechamiento de la superación temporaria de la situación prevaleciente a fines de 2001 para promover una recuperación sostenida de la confianza ciudadana en la política; 2) la necesidad de concebir e implementar soluciones que permitan la reconstrucción de instrumentos estatales con los cuales lidiar con temas como la siempre creciente desigualdad, la inseguridad pública, y la regeneración de procesos de acumulación de capital, y 3) la inserción de Argentina dentro de un MERCOSUR que recupere alguna cuota de dinamismo.